

Reinventando una identidad colectiva. Foros sociales y encuentros campesinos en Mesoamérica	Título
Bartra, Armando - Autor/a	Autor(es)
OSAL, Observatorio Social de América Latina (año V no. 15 sep-dic 2004)	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2004	Fecha
	Colección
Foros sociales; Identidad colectiva; Encuentros campesinos; Mesoamerica;	Temas
Artículo	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110309122458/29bartra.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Reinventando una identidad colectiva

Foros sociales y encuentros campesinos en Mesoamérica

Armando Bartra*

* *Director del Instituto
de Estudios para el
Desarrollo Rural Maya AC,
miembro del
Comité Editorial
de la revista Chiapas.*

Con el lema de “Construyendo poder popular para la autodeterminación”, del 19 al 21 de julio de 2004 se realizó en San Salvador el V Foro Mesoamericano de los Pueblos, reunión multitudinaria que continuó los trabajos de las cuatro anteriores y recogió las conclusiones de una serie de foros sectoriales y temáticos (mujeres, campesinos, jóvenes, etc.) que habían tenido lugar durante los días previos en la misma ciudad. A diferencia de los primeros, el V Foro ya no se extenuó en la crítica al Plan Puebla-Panamá (PPP), pero originalmente ese programa fue disparador de la nueva convergencia social mesoamericana.

Iniciativa multinacional del gobierno mexicano impulsada en el inicio de la administración de Vicente Fox y formalizada en el mes de junio de 2001, el PPP se opera dentro del llamado Mecanismo de Tuxtla, y al no ser un tratado comercial sus acuerdos no tienen carácter de ley ni obligan a los estados más allá de la voluntad política de los gobiernos. La iniciativa mexicana es, entonces, menos

trascendente que los pactos comerciales bilaterales y multilaterales existentes entre los países de Centroamérica, entre estos y México, entre México y el resto de Norteamérica, y mucho menos trascendente que el acuerdo comercial que está en proceso entre algunos países del Istmo y Estados Unidos.

El PPP se anuncia como un programa integral de desarrollo sustentable que además de fomento económico e infraestructura productiva debiera incluir cuestiones sociales, ambientales y culturales. Supuesta multidimensionalidad que no pasó del enunciado, pues ni siquiera en la parte mexicana, que abarca nueve estados, se han logrado concertar los proyectos de desarrollo subregional del presunto Plan Sur-Sureste. Pero además, una severa astringencia presupuestal reduce sus pretensiones. En marzo de 2002, Marcelo Antinori, coordinador de la Unidad de Apoyo al programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo: “Las acciones del PPP serán limitadas, pues la inversión con que se financia proviene de recursos fiscales, que son pocos; o de préstamos, que no son fáciles de conseguir”. Y cuando el Banco negoció una línea de crédito hasta por 4 mil millones de dólares tampoco se destrabaron las cosas, pues como meses después señaló el propio Enrique Iglesias: “La oferta de crédito del BID y de otros organismos financieros no es la limitante para la puesta en marcha y ejecución de los objetivos del PPP... sino la capacidad de endeudamiento de los países” (*La Jornada*, 2002).

En México el PPP ha tenido muchos problemas. Al inicio, su coordinador acordaba con la presidencia de la República y tenía incumbencias transversales que abarcaban todas las secretarías de gobierno, pero después la responsabilidad se trasladó a un funcionario menor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encargado que acaba de renunciar. Esto además de que el gobierno federal no ha logrado siquiera ponerse de acuerdo con los nueve gobernadores de la región: en julio de 2003 la SRE se extenuaba en el enésimo intento de relanzar el proyecto, si no hasta el [río] Darién, sí cuando menos hasta el Suchiate, firmando con ocho entidades federativas del Sureste un convenio de colaboración para que en diciembre de ese año hubiera planes de desarrollo por estado. Sólo que los gobernadores no se fueron convencidos: “mientras el PPP no sea prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo –dijeron–, todo quedará en papeles sin ninguna utilidad ni validez” (*La Jornada*, 2003). Así, los planes nunca se hicieron, y a fines de 2004 una de las “tareas inmediatas” de la SRE sigue siendo la firma del Acuerdo Para el Desarrollo del Sur-Sureste entre el titular de la Cancillería y los gobernadores. A casi cuatro años de lanzado el PPP, y cuando al gobierno de Fox le quedan menos de dos, todavía no se han acordado proyectos de desarrollo para la parte mexicana.

Despojado de su demagógico ropaje de desarrollo social, el PPP se redujo a relanzar viejos planes de integración de la infraestructura física regional. La Iniciativa Mesoamericana

***“En México
el PPP ha tenido
muchos problemas.
Al inicio,
su coordinador
acordaba con
la presidencia
de la República
y tenía incumbencias
transversales
que abarcaban todas
las secretarías
de gobierno,
pero después
la responsabilidad
se trasladó a un
funcionario menor
de la Secretaría
de Relaciones
Exteriores (SRE),
encargado que
acaba de renunciar”***

de Transportes (IMT), por ejemplo, es el nuevo nombre para un proyecto treintañero de articulación vial que deberá abarcar cerca de 10 mil kilómetros de red carretera. Obras que desde hace mucho México viene desarrollando en su territorio, del mismo modo que los países del Istmo, cuyo Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAM) impulsa acuerdos de armonización y liberalización cuando menos desde 1999. Pero el problema de fondo es presupuestal, pues pese a que el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica y otras instancias financieras están aportando recursos a tasas preferenciales, la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos prevista representaría para las estragadas economías istmeñas una deuda externa adicional de alrededor de 5 mil millones de dólares. Así las cosas, la fórmula mágica es la privatización: concesiones a inversionistas foráneos para construcción y operación de la infraestructura.

Otro proyecto es la integración eléctrica regional, que el PPP transforma en Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Eléctrica (IMIE). Tiene más de un cuarto de siglo y busca desarrollar mercados energéticos multinationales propiciando la participación de inversionistas privados. La parte sustantiva del proyecto es el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), que ya desde 1976 opera entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. De hecho se trata de una privatización, pues en Centroamérica más de la mitad de la generación proviene de transnacionales estadounidenses, españolas y canadienses que, junto con los capitales públicos de la región, conforman desde 1998 la Empresa Propietaria de la Red (EPR). México se insertó en el SIEPAC en 2003, al firmar un acuerdo de interconexión con Guatemala. Sin embargo, hay obstáculos legales para su incorporación plena al proceso centroamericano pues la Constitución limita fuertemente la participación privada en el sector eléctrico. Es por eso que Miguel Hakim, subsecretario de la SRE, insiste en que México debe modificar sus leyes para permitir a particula-

res la generación y comercialización del fluido, propiciando así la plena integración del país al aquelarre privatizador de la IMIE (*La Jornada*, 2004).

El proyecto original del PPP incluía también la construcción de un buen número de presas hidroeléctricas, y si bien el responsable mexicano siempre insistió en que el Plan no tenía nada que ver con estas obras, sucede que recientemente se reactivó el proyecto de La Parota, sobre el Río Papagayo, en el estado de Guerrero. Al igual que los de integración carretera y eléctrica, se trata de planes añejos y muy anteriores al anuncio del PPP –programa que además insiste en que la obra no le incumbe. Sin embargo, digan lo que digan los funcionarios públicos, el repudio a La Parota se inscribe dentro de la lucha contra el PPP, y su amplitud, solidaridad y coordinación sólo se explican por la existencia de una amplia red mesoamericana de resistencia a los megaproyectos del Plan. Y es que el PPP es un proyecto gubernamental menguante, pero paradójicamente el movimiento social que lo cuestiona no ha dejado de crecer.

La resistencia se inició en mayo de 2001 con un Primer Foro Social realizado en Tapachula, Chiapas, prolongado en noviembre de ese mismo año con un Segundo Foro en Quetzaltenango, Guatemala, al que siguieron el tercero en Managua, Nicaragua, en julio de 2002; el cuarto en Tegucigalpa, Honduras, en julio de 2003; y el quinto en San Salvador, República de El Salvador, en julio de 2004. La convergencia, luego rebautizada Foro Mesoamericano de los Pueblos, ha tenido una capacidad de convocatoria creciente, y en las tres últimas reuniones los participantes han rebasado el millar.

El agravio disparador de las reuniones fue el Plan Puebla-Panamá: el Pedro Páramo de los programas de gobierno. Un eufónico proyecto que no acaba de cuajar, pero que al ponerle nombre y apellido a la injusticia mesoamericana gestó un intenso rechazo social, quizá desproporcionado en relación a los cortos alcances de la iniciativa, aunque apenas suficiente para enfrentar los muy reales estragos que el malhadado “modelo de desarrollo” ha causado y causa a la región. Así las cosas, los PPPfóbicos pasaron a ocuparse también de cuestiones más trascendentes y acuciantes, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); la ominosa Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que promueve Washington, y su avanzada mesoamericana: el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (TLCCAEEUU), que acaba de firmarse; el impacto regional de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC); la ominosa injerencia del Banco Mundial en el Corredor Biológico Mesoamericano; la amenaza económica y ambiental que representan las semillas transgénicas; los derechos autonómicos de los pueblos indios, pendientes de reconocimiento; la incontenible migración que vacía pueblos, regiones y países enteros.



© Ariane Grau Crespo

Confluyen en los Foros tanto organizaciones sociales como civiles —desde el segundo algunos delegados rurales acordaron propiciar adicionalmente una convergencia sectorial de base. Convocaron entonces un Primer Encuentro Campesino Mesoamericano, realizado en Tapachula, Chiapas, en mayo de 2001, con la participación de 270 delegados de casi 60 organizaciones rurales, la mayor parte mexicanas. La desproporción se corrigió en el Segundo Encuentro, celebrado en Managua, Nicaragua, en julio de 2002, con la asistencia de menos agrupaciones pero más representativas de la región, pues la mayoría de los 170 delegados, pertenecientes a medio centenar de organizaciones, era centroamericana. El Tercer Encuentro, que tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, en julio de 2003, con casi 200 delegados de alrededor de 50 agrupamientos, resultó aún más equilibrado y representativo: de México participaron unos 40 dirigentes; hubo delegaciones muy nutridas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; algo menores fueron las de Costa Rica, Panamá y Belice; y por primera vez asistió una representación de la cubana Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Finalmente, el cuarto encuentro se celebró en San Salvador del 16 al 18 de julio de 2004, con la asistencia de cerca de 170 delegados.

Las primeras reflexiones colectivas sirvieron para conocerse e identificar los problemas compartidos, pero ya en el Segundo Encuentro se aprobó una plataforma común y en el tercero se formalizó una coordinación regional bautizada Movimiento Indígena y

[AÑO V N° 15 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2004]

Campesino Mesoamericano (MOICAM), de modo que la cuarta reunión fue también el primer encuentro formal de la debutante convergencia.

Para una región en vilo y siempre al borde del desastre, la plataforma del MOICAM, más que una propuesta sectorial, es un proyecto de futuro. Porque en los encuentros campesinos no se discute sólo de agricultura, se debate el destino de Mesoamérica toda: o una neocolonización salvaje que siga poniendo los haberes endémicos de la región al servicio de la acumulación rapaz y especulativa, o una articulación desde abajo y hacia adentro sustentada en la economía solidaria.

La idea de que el mercado nos hará libres, justos y democráticos, la falacia de que la riqueza gotea y que habiendo crecimiento algún día habrá distribución del ingreso, son engaños que buscan sustentar la propuesta de que la liberalización comercial es la llave del desarrollo. Acusados de antiguos por el libertinaje comercial y los acuerdos inicuos, los mesoamericanos saben que no es así: ni la integración virtuosa ni el desarrollo equitativo se procuran desregulando el mercado. Más bien lo contrario: el TLCAN, pero también el acuerdo que firmó México con los tres países centroamericanos del llamado “Triángulo del Norte” —Guatemala, El Salvador y Honduras—, han ocasionado desarticulación de la economía y regresión social en los asociados más débiles.

No es casual, entonces, que la primera acción del MOICAM haya sido la participación en la Marcha Internacional por los Derechos de los Campesinos y la Soberanía Alimentaria, realizada en septiembre de 2003 en Cancún, Quintana Roo, con motivo de la Quinta Reunión Ministerial de la OMC. Otras actividades del Movimiento fueron el taller *Los indígenas y campesinos mesoamericanos frente a los tratados comerciales: por una integración nacional equitativa*, realizado en México en marzo de 2004 y al que asistieron representantes de 31 organizaciones rurales de 7 países, así como numero-

***“... que el mercado
nos hará libres,
justos y
democráticos,
la falacia de que
la riqueza gotea
y que habiendo
crecimiento algún
día habrá
distribución
del ingreso,
son engaños
que buscan sustentar
la propuesta
de que la
liberalización
comercial es
la llave
del desarrollo”***

sos académicos de México y Centroamérica, y donde se firmó el Manifiesto de Xochimilco. A dicho taller le siguió en abril una movilización por la tierra en el estado de Oaxaca. Poco antes, en San Salvador, se había realizado el Foro Campesino Centroamericano por la Defensa de la Tierra, Nuestra Semilla y la Dignidad, patrocinado por el MOICAM y convergencias más antiguas como la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

Otra confluencia social gestada por la resistencia al PPP y nacida de los foros es la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), que agrupa organizaciones sociales y civiles mexicanas y se ha centrado en la resistencia a los despojos ocasionados por megaproyectos. Con el mismo carácter pero menor cobertura territorial han surgido organizaciones como la Coordinadora en Defensa del Territorio y de los Pueblos Indígenas del Istmo, y convergencias temáticas como el Frente Contra las Represas, que enlaza comunidades mesoamericanas amenazadas por embalses hidroeléctricos y que en Guerrero ha impulsado las movilizaciones contra la construcción de La Parota. En Centroamérica han surgido igualmente movimientos regionales como la salvadoreña Alianza Ciudadana Contra la Privatización, que cuestiona el encarecimiento del servicio eléctrico prestado por transnacionales. Una medida de la resistencia fue el masivo y airado repudio que las organizaciones civiles y sociales guatemaltecas dieron al presidente Fox cuando en marzo de 2004 llegó a ese país para “relanzar” su iniciativa mesoamericana.

La amplia difusión del PPP devino triunfo pírrico de sus impulsores, pues al darle nombre y rostro a un lacerante patrón de desarrollo generó un rechazo amplio y duradero, repudio que quizá trasciende los cortos alcances de la iniciativa gubernamental pero ha sido clave para articular resistencias antes dispersas. Si el PPP no se le hubiera ocurrido al presidente Fox, los mesoamericanos de a pie hubiesen debido inventarlo.

Virtud no menor de la resistencia al programa ha sido plantear una perspectiva suriana en contextos tan norteados como el mexicano y el centroamericano. Mientras que el TLCAN, el TLCCAEEUU, el ALCA y el propio PPP promueven una globalización imperial, los foros y encuentros mesoamericanos apuntan hacia una globalización plebeya desde el Sur y desde abajo. En particular, la crítica al PPP propició la reinención de Mesoamérica, haciendo reto político y territorio de nuevas utopías de lo que era un empolvado concepto histórico y antropológico.

Más importantes que el “¡NO!” suscitado por el PPP son las opciones que comienza a generar. Porque cuando no hay otras oportunidades de producción y empleo, repudiar sin más las plantaciones y maquiladoras ecodidas y negreras es apostar al éxodo. No basta oponerse a carreteras, presas, plantaciones especializadas, industrias de montaje,



© CMI Chiapas

turismo dorado, bioprospección, transgénicos y agroquímicos dañinos en una suerte de neoluddismo posmoderno: es necesario también ir diseñando las vías de un desarrollo incluyente. Entonces, lo mejor del inicuo y marginador PPP es que desafió a los pueblos de la región a diseñar un Plan Panamá-México equitativo y justiciero. En la declaración firmada por las organizaciones campesinas mesoamericanas en marzo de 2004 encontramos un esbozo de ese proyecto alternativo¹.

Bibliografía

La Jornada 2004 (México DF) 19 de octubre, entrevista de Elizabeth Velasco.

La Jornada 2003 (México DF) 19 de julio.

La Jornada 2002 (México DF) 27 de junio.

Notas

1 N. del Ed.: Los principales fragmentos de dicha declaración, seleccionados por el autor, pueden consultarse en la sección Documentos que acompaña al presente dossier.